

La situación social en América Latina

Eduardo Morales M.
(con la colaboración de
Fernando Calderón)
Profesor-Investigador,
FLACSO,
Santiago de Chile.

El presente artículo plantea una visión global de la coyuntura actual de América Latina a través de algunos indicadores que pueden constituirse en sostén de los cursos de acción posible que emprendan las Políticas Sociales.

A raíz de la *crisis de la deuda externa* propagada por casi toda América Latina en el segundo semestre de 1982, diversos organismos internacionales comenzaron a preocuparse por los efectos que este colapso financiero pudiese provocar en la región.

El replanteamiento de los aspectos *sociales* en el desarrollo de América Latina se ha venido dando a raíz del elevado coste social de esta crisis por el agravamiento del desempleo y subempleo, la caída de los salarios reales, el incremento de la pobreza y el notorio deterioro de los servicios públicos.

Todo esto se produce como consecuencia de las políticas aplicadas para paliar la crisis, junto a una notoria tendencia a la expansión económica en detrimento de las condiciones en las cuales ésta se ha venido desarrollando.

Las políticas desarrolladas mostraron una dirección equivocada, que se origina en la ausencia de un referente concreto y de un permanente diálogo entre el Estado y la Sociedad, la cual seguía presionando sobre el primero para obtener de él algunos beneficios.

En los últimos años, ha sido de suma importancia la propuesta que plantea el desarrollo como un proceso expansivo de los bienes y servicios que un individuo puede disponer utilizando sus derechos y oportunidades, y lo que éste puede o no hacer con ellos.

Dicha propuesta está reforzada por la de la CEPAL, que pone el énfasis en la desigualdad en la distribución de los frutos del desarrollo entre los diferentes estratos sociales.

Aún en situaciones de bajo nivel de desarrollo relativo y con restricciones propias de la crisis, existen opciones de políticas gubernamentales destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población. También es necesario tener en cuenta, y es determinante en toda aplicación de nuevas políticas, los factores estructurales ligados a formas históricas predominantes de desarrollo. Asimismo, hemos de tener en cuenta la desigualdad generalizada en la distribución del ingreso.

De esta forma, la preocupación por el *desarrollo humano* implica tanto el desarrollo de servicios sociales como el desarrollo económico.

Propuestas de desarrollo económico y social

Las principales propuestas orientadas al desarrollo social a largo plazo pueden clasificarse en dos grandes tendencias: las centradas en torno a las consecuencias sociales de la transformación de la estructura productiva, y las que sugieren una reorientación de la política social.

a) Ajuste estructural y transformación de la estructura industrial.

La idea de como mantener estable una vez recuperado el desarrollo económico gira en torno a la transformación de la estructura productiva industrial, en la cual influye de manera decisiva la evaluación del desempeño pasado del mismo. Considerando que su principal defecto radica en su incapacidad para solucionar el desequilibrio exterior, su principal transformación debe ser de *ajuste estructural* orientado a la promoción de exportaciones y sustitución de importaciones industriales.

b) Transformación productiva y distributiva.

Las estructuras de la producción y la distribución tienen una relación de influencia recíproca, ya que una condiciona a la otra. La modalidad predominante del desarrollo económico ha tenido como eje un mercado interno concentrado, basado en una considerable desigualdad en la distribución del ingreso.

La multiplicidad de políticas que abarcan las propuestas distributivas son, por un lado, las distributivas propiamente tales y, por otro, las políticas económicas aplicadas en función de las anteriores.

“El desarrollo equitativo se ha convertido no sólo en un imperativo ético, sino también en un requisito de la estabilidad social y consolidación de la democracia”

Las principales políticas distributivas introducen cambios en la distribución de los activos productivos y de los nuevos activos mediante la reorientación de la inversión, a la vez que apoyan a determinados sectores productivos, destacando el caso especial de la transformación de la estructura agraria.

c) Políticas de empleo y salarios.

La oferta de empleo y su incremento está directamente ligada a la estrategia de transformación productiva que se adopte. A partir de 1981, la tasa de creación de empleo urbano moderno se redujo de manera considerable. Dicha tasa creció a un ritmo muy inferior en relación al crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA) no agrícola.

En otra faceta de generación de empleo, la lucha contra la inflación requiere de una negociación amplia sobre políticas de precios, salarios y empleo, en que todos los sectores sociales estén representados y en cuya resolución final los sectores populares se sientan incluidos. En este proceso tendrá que incorporarse el sector más marginado, el campesinado.

Respecto a la demanda de empleo, ésta no está resuelta debido al crecimiento de la población y al

impacto sobre el mismo que se genera a largo plazo. En cuanto a los salarios, los grandes desequilibrios macroeconómicos de los últimos años han echado por tierra toda propuesta que incluya un aumento de éstos.

Así, es necesario encontrar una fórmula que permita la recuperación de los salarios reales sin afectar el esfuerzo de inversión ni impulsar la espiral inflacionaria.

d) La reestructuración de los servicios sociales

Las principales acciones se deberían orientar a la protección de los pobres durante el período de ajuste estructural, con la finalidad de aliviar los costes sociales del mismo, mediante la reasignación de los gastos sociales para un aumento de la eficiencia, la creación de programas de empleo de emergencia y el otorgamiento de subsidios para alimentos y nutrición.

Se deberían desarrollar, a la vez, programas de erradicación de la pobreza en gran escala como estrategia global que abarquen además la transformación productiva con fines de desarrollo económico.

También es importante la creación de sistemas de servicios sociales universales y redistributivos, junto a una reorganización institucional de los servicios ateniendo a la magnitud de la intervención estatal, la coordinación institucional y la democratización de los servicios sociales.

La búsqueda del desarrollo equitativo se ha convertido no sólo en un imperativo ético de las sociedades y de las políticas públicas, sino también en un requisito funcional de la estabilidad social y consolidación de la democracia, a la vez que en un imperativo histórico a partir del replanteamiento del destino de las naciones latinoamericanas.

Los índices de desigualdad en la distribución del ingreso, de pobreza extrema y crítica, de desnutrición y alimentación precaria, de deserción escolar y de aumento del analfabetismo (funcional y real), de débil o nula incorporación de amplios segmentos a la economía moderna y de crecimiento vertiginoso del sector informal, etc. muestran un crecimiento impresionante durante el último decenio.

Las tendencias universales básicas en la tecnología, la organización de la producción, las demandas y los valores son incompatibles con el reconocimiento de la especificidad histórica del desarrollo de cada sociedad, en tanto esto sirve de justificación a la interpretación de las desigualdades de Latinoamérica en el marco de la configuración de los rasgos estructurales que han caracterizado el desarrollo de esta región en la posguerra.

Las políticas sociales compensatorias profundizan, además, un problema que es antiguo en la región.

En efecto, durante la vigencia de los esquemas desarrollistas, en los tiempos en los que el modelo de modernización de la segunda posguerra era todavía dinámico, las políticas sociales eran parte de la acción estatal, y eran vistas como asistencialistas y paternalistas.

A nivel económico, los rasgos estructurales comunes a este estilo son: la especialización internacional basada en recursos naturales, el dinamismo interno asentado en el consumo, los patrones de consumo imitativos, la orientación de la industrialización hacia el mercado interno junto a la desarticulación productiva, la debilidad tecnológica y la falta de competitividad internacional, la baja presencia del empresariado local en el proceso de acumulación y de progreso técnico, el protagonismo estatal y, finalmente, el dualismo agrario.

El estilo de desarrollo latinoamericano ha producido un conjunto de desequilibrios estructurales interrelacionados que hacen insostenible el crecimiento a largo plazo, entre los que destacan: el poder de compra de las exportaciones tiende a expandirse menos que la demanda de importaciones derivadas; los requerimientos de inversión para expandir el producto potencial tienden a superar la capacidad de ahorro nacional real; los flujos de capitales externos comprometen corrientes futuras de pagos por intereses y beneficios; la demanda derivada de incorporación de tecnología supera con creces las capacidades tecnológicas locales; la insuficiente difusión de progreso técnico en estructuras productivas desarticuladas hace posible la permanencia de una cierta heterogeneidad estructural intersectorial e intrasectorial; la disponibilidad de fuerza de trabajo tiende a superar la demanda de empleo moderno; la configuración estructural de la acumulación se manifiesta en el desajuste entre la inversión necesaria y la correspondiente a la expansión de la capacidad de producción con la estructura actual; y el papel del Estado involucra una fragilidad fiscal estructural.

Los patrones distributivos emergentes de esta estructura productiva reflejan de manera sistemática la gravitación de la heterogeneidad estructural y el subempleo, creándose de este modo un círculo vicioso.

Por ende, el anhelado ataque integral al círculo vicioso de la pobreza mediante servicios sociales complementarios requiere también de un diagnóstico de como se reprodujo esa amplia malla de intereses que explican las distorsiones de programas y políticas sociales. Y para evitar que la inyección de más recursos solo produzca y amplíe patrones actuales de

desigualdad, la democratización de la planificación, ejecución y control de los servicios sociales debe pasar por una efectiva descentralización.

El proceso de descentralización

La tendencia a la descentralización en América Latina ha sido impulsada, básicamente, hacia funciones administrativas, de provisión de servicios sociales e incluso de promoción del desarrollo.

También existe un gran recelo ante el riesgo de que la descentralización pueda utilizarse como un *caballo de Troya* de otros elementos de la agenda *oculta* del ajuste estructural para los que es más difícil obtener consensos políticos amplios.

En la realidad latinoamericana la descentralización puede, además, contribuir a la coherencia de la estrategia general de transformación productiva con equidad y sustentabilidad. Así, este proceso ha de entenderse no sólo como la configuración de una competitividad futura, sino como el punto de partida que son las estructuras políticas y de decisión muy centralizada.

En todo caso, la descentralización como fase del desarrollo recoge ámbitos como el *regional* frente al *central* o al *local*, que pueden constituirse en escenarios interesantes de dinámicas sociales más participativas. Este último, siendo esencial en la provisión de servicios sociales y colectivos, es decir en el ámbito de la reproducción social o en la descentralización de los ingresos y gastos fiscales, es menos relevante para la promoción del desarrollo económico y está preñado, en diversas ocasiones, de excesivo localismo, que puede dar lugar a la legitimación de prácticas caciquiles y gamonales.

Además, está el problema de la heterogeneidad de los sistemas locales que incide fuertemente en la velocidad con que el proceso se implementa: a mayor heterogeneidad, mayor necesidad de intervención del Estado central para corregir los efectos perversos de tal situación.

En resumen, en la medida en que sea posible avanzar en la legitimidad democrática, en el proceso descentralizador y en el consenso social, el poder regional se irá constituyendo en el representante corporativo de los intereses colectivos regionales en escala *macro* de acuerdo con las condiciones locales.

Así, el desafío permanente es superar el estilo que ha desplegado América Latina desde la posguerra que lleva aparejado principios de exclusión social, ya que resulta imposible compartir los patrones

de consumo que constituyen el motor dinámico de este estilo y la aspiración social que el mismo proyecta.

Los efectos sobre la propia concepción democrática del Estado saltan a la vista, ya que la despolitización por la vía de la exclusión implica una reducción de la participación de los actores sociales y con ello la amputación de la aptitud creadora y participativa de las sociedades.

De este modo, las condiciones para un desarrollo sostenido, puestas en evidencia por los orígenes y despliegue de la propia crisis, serán: alivio de la carga de la deuda; transformación productiva, competitividad y progreso técnico; incremento superavitario y apertura exportadora; cambios en los patrones de acumulación; articulación social; reforma del Estado; y consolidación de la democracia.

Los desafíos que enfrentan los países de América Latina hoy en día son enormes para que pueda haber, realmente, un desarrollo emergente en términos económicos, una homogeneidad socio-estructural y aplicación de políticas, como se pretende desde la llamada *modernización*.

Los aspectos sociales

“En la mayoría de los países, la crisis fue acompañada por un estancamiento y, en algunos casos, por una involución del sector moderno de la economía”

Más allá de las consideraciones económicas que hemos analizado, existen las de carácter social, como consecuencia de este mismo desarrollo, que se traduce en una excesiva desigualdad.

El significativo papel que desempeñan las élites en el ámbito cultural ha sido una aparición bastante común en las sociedades latinoamericanas. El problema concreto que estas influencias culturales acarrearán, se traduce en que una diversidad cultural muy profunda que hace difícil la difusión de nuevos valores que logren constituir comportamientos sociales adecuados para un proceso de transformación.

Por ello, en aquellas sociedades donde estos desfases son evidentes por la amplia desigualdad cultural es muy difícil compartir valores comunes y, por consiguiente, crear un sistema de los mismos que haga posible legitimar socialmente los resultados de la transformación.

Así, podríamos decir que no existe una correspondencia entre la estructura social en conjunto y la estructura del sector dinámico de la economía que,

además, opone grandes obstáculos a la dinámica de expansión de éste.

Por otra parte, el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud estaban estrechamente relacionados con la capacidad de organización y al reconocimiento de derechos de los diferentes sectores sociales, capacidad que se ha visto erosionada por efecto de la crisis.

Toda esta situación descrita, sustentada en un estilo de desarrollo concentrador y sin equidad, se ha agravado por efecto de la larga crisis recesiva por la que la mayoría de los países latinoamericanos han atravesado.

Asimismo debe tenerse en cuenta que el *costo social* no sólo implica que afecta en términos de ingresos o de nivel de vida, sino que tiene también como consecuencia el que se debilitan mucho más aún los escasos mecanismos de integración existentes en la sociedad y, por lo tanto, vastos sectores pasan a engrosar el alto número de excluidos.

Este hecho introduce una fuerte dimensión de rigidez en la relación social. Se apunta a la no existencia de un cuadro político común entre privilegiados y excluidos, lo que a su vez implica la inexistencia de canales institucionales a través de los cuales el conflicto puede expresarse.

La característica de este modelo de desarrollo es la tendencia a la concentración de recursos en los sectores altos de la sociedad, cuya consecuencia es la exclusión de vastos sectores de la población.

En relación a la estructura del sector agrario cabe señalar la formación de un grupo dinámico -en términos capitalistas- formado en su mayoría por el sector llamado *empresarial moderno exportador*. En éste se ha impulsado una modernización de las formas agrícolas, la introducción de tecnologías, el aumento de la productividad y la modernización de las estructuras de comercialización.

En el grupo de los llamados *campesinos* los factores que dan origen a la falta de equidad son la baja dotación de tierras, la mala calidad de éstas y el bajo nivel de tecnología y productividad de que disponen.

Así, el problema agrario ya no puede ser enfocado desde la perspectiva que privilegia la incorporación a la vida urbana. Lo que está en discusión son los objetivos de la *sociedad agraria* por la que se opta y cuales pueden ser sus modalidades.

Desde otro ángulo, la privatización de servicios destinados a la reproducción de las condiciones de vida, como la salud, seguridad social y vivienda, ha

significado la incorporación a ellos de cierto criterio de rentabilidad casi empresarial.

Ciertos bienes, como los ya mencionados, junto con la educación, culturas, etc., requieren ser concebidos como bienes públicos. De lo contrario, al ser considerados como bienes privados, la pugna en términos de distribución en torno a ellos se agudiza e, incluso, se defienden como privilegio exclusivo.

En lo que se refiere al papel del Estado como productor de bienes y servicios en relación a la equidad, el sector productivo estatal sigue siendo una parte importante de la economía nacional, constituyendo un elemento clave en la generación de excedentes, y en procesos de inversión y acumulación.

En general, los Gobiernos de la región han procurado paliar la difícil situación concentrándose en tres aspectos del gasto social: el mantenimiento de la cobertura universal de los servicios más esenciales; la privatización selectiva; y la focalización de la atención estatal en sectores o problemas críticos.

El empleo

En relación específica al empleo, podemos mencionar las consecuencias que le acarreó la crisis de los ochenta, tanto a las mismas tasas de empleo, como a los niveles de ingreso y las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

Los principales cambios devenidos a raíz de ésta crisis fueron el fuerte descenso de la capacidad de absorción de empleo en los sectores de producción que proporcionaban las ocupaciones más estables, más productivas, mejor remuneradas y con mayor cobertura de la seguridad social, y el marcado incremento consiguiente en las tasas de desempleo, la declinación de los salarios reales, junto a las nuevas formas en que los gobiernos reaccionaron ante esta situación en el marco de las políticas de ajuste y reestructuración de las economías.

La situación de estancamiento, e incluso de involución del empleo y la productividad, representó para la región una clara reversión de las tendencias observadas en las décadas anteriores (1960-1980).

A pesar de todo, con la crisis se produjo una rápida transferencia de mano de obra desde actividades de mayor productividad e ingresos a otras de inferiores condiciones, congelándose las oportunidades de movilidad social y con desplazamientos de hogares hacia estratos sociales más bajos.

Si bien es cierto que la reducción de la productividad restringió las posibilidades del crecimiento y de la

equidad en el mediano plazo, el resultado circunstancial que más afectó a los hogares en un determinado lapso de la década fue el agudo incremento de las tasas de desempleo. Entre 1983 y 1985 las tasas de desempleo alcanzaron en muchos países los niveles más altos de los que se tenga registro (ver Cuadro I).

Sin embargo, en el período considerado hubo un notable crecimiento del empleo en las pequeñas empresas, es decir con menos de diez personas ocupadas. Según un promedio no ponderado la ocupación en éste sector sufrió un incremento de un 23% respecto al del empleo global.

A su vez, el considerable aumento del empleo no profesional por cuenta propia, en términos de participación relativa, estuvo acompañado por una reducción importante en los ingresos por trabajo, que en 1987 fueron de alrededor de un 70% de lo que habían sido en 1980.

Asimismo, las deficiencias que pasaron a exhibir los servicios estatales, básicamente en su calidad, por el efecto de la drástica reducción de sus recursos, crearon vacíos en la oferta de servicios, que probablemente fueron ocupados por empresas privadas.

Así, en la mayoría de los países, la crisis fue acompañada por un estancamiento y, en algunos casos, por una involución del sector moderno de la economía. Este hecho redujo significativamente las posibilidades de mejoramiento económico de la población y desplazó a segmentos importantes de ésta hacia empleos menos estables, de menor remuneración y con escasa cobertura de seguridad social.

La educación y la salud

En lo que respecta a la educación y la salud, esta crisis forzó a los distintos gobiernos a hacer grandes esfuerzos por atenuar las consecuencias negativas de la escasez de recursos fiscales en el suministro de estos servicios sociales básicos; objetivo logrado sólo parcialmente.

Según un reciente estudio, en seis de los ocho países analizados, el punto máximo de gasto social, tanto en términos absolutos como por habitante, se registró en vísperas de la crisis de la deuda (ver Cuadro II).

En particular, las reducciones en el gasto de capital en educación y salud son consistentes y generalizadas a lo largo de la década en todos los países latinoamericanos (ver Cuadro III).

La privatización de muchas empresas estatales con funciones sociales en sentido amplio, ha causado

la anulación de estos instrumentos de política social, con lo cual el gasto social estricto ha debido asumir el papel de amortiguador de los efectos de la crisis económica. Los subsidios globales indirectos e indiscriminados a la oferta fueron reemplazados, en muchos casos, por subsidios directos y progresivos a la demanda.

En conclusión, mientras dure la fuerte restricción del gasto social, la mejor estrategia parece encontrarse en la búsqueda permanente de una combinación flexible y dinámica de servicios básicos de cobertura universal con focalización en los problemas y grupos humanos que requieren una atención más urgente.

Algunos aspectos de gestión e intervención social

En líneas generales queremos referirnos a la gestión como transformación en un marco recesivo de América Latina. Esta afecta a las propias bases de gestión de la política macroeconómica, a la relación entre los sectores público y privado y a la estructura institucional de la administración pública.

No obstante, se plantea sin violentar los equilibrios básicos del modelo capitalista.

En la búsqueda de una mayor inserción en la economía internacional se intenta liberar toda la energía creadora del mercado, procurando generar un camino de crecimiento que permita aplicar instrumentos de intervención pública que compensen las distorsiones del mercado y potencien ciertas líneas y actividades estratégicas.

Es reconocido que la intervención del Estado no ha sido tan acertada como debiera haber sido, lo que para algunos ha significado un dogmatismo desde antaño. No obstante, se parte del convencimiento de que la función del Estado es necesaria, tanto en su papel como en su forma de intervención (planificación), que tiende a diferir.

Existen tres argumentos que ayudan a comprender el amplio consenso sobre la necesidad de modificar el papel del Estado: primero, la creciente complejidad del sistema económico y de las relaciones internacionales, que hacen imposible las decisiones centralizadas; segundo, la incapacidad del sector público para desempeñar las funciones que tiene un

Estado intervencionista en exceso; y tercero, la apropiación patrimonial de los aparatos públicos por parte de intereses de dudosa convicción democrática.

Por su parte, la planificación convencional adolecía de los siguientes defectos: los planes concluían una vez elaborado el documento, manteniendo así poca conexión con la realidad económica; había una obsesión formalista excluyente de las realidades sobre las que era difícil elaborar un modelo; y los planificadores actuaban de manera voluntarista, magnificando su capacidad para conformar el comportamiento de los agentes y el carácter benigno y progresista del Estado *fetichizado*.

En este marco amplio, la necesidad de la intervención pública en la esfera económica y social surge de las siguientes razones: la coexistencia de diferentes formas de propiedad; la necesidad de liderazgo público para coordinar ofertas y demandas efectivas a largo plazo; las deficiencias del mecanismo de precios relativos para asignar los recursos debido al desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías y a la inestabilidad macroeconómica; las exigencias de los organismos multilaterales; y la movilización de energías hacia un camino creíble de inserción en la economía internacional.

Para desarrollar estas funciones, el Estado y la planificación deberían guiarse por los siguientes principios y pautas de intervención, que implican la consolidación de un entorno más liberal que exige al Estado dotarse de mayores funciones.

En relación al marco general de la intervención, la multiplicidad de centros y formas de poder exige compartir éste y, por ello, las decisiones estratégicas sobre el futuro colectivo. Ello requiere el intercambio simple y sin trabas de la información, las demandas, las preocupaciones y los puntos de vista entre el Estado y los agentes sociales:

* La descentralización puede ser un instrumento funcional en éste sentido.

* El plan debería garantizar la coherencia interna del sector público y reducir la incertidumbre en los agentes sociales y empresariales.

En relación a la gestión económica, la gestión macroeconómica y sectorial debe ser coherente con la necesidad de avanzar hacia cotas de equilibrios aceptables. El plan debe presentar opciones selectivas, claras y realistas de los recursos internos y externos disponibles y enfrentarse a la realidad del endeudamiento:

• Hay que avanzar en la fase de poscrisis, lo que exige la definición de una alternativa estratégica de

“Es reconocido que la intervención del Estado no ha sido tan acertada como debiera haber sido, lo que para algunos ha significado un dogmatismo desde antaño”

desarrollo e inserción externa en un entorno de relativa escasez de recursos financieros externos. Se requieren, así, políticas activas en el cambio estructural.

- Dar especial importancia a la capacitación del sector productivo y la actualización de la tecnología.
- Potenciar la descentralización, que puede ser un instrumento relevante para satisfacer las necesidades sociales, la gestión económica y la promoción del desarrollo.
- Crear un entorno propio para los mercados competitivos.
- Reforzar la institucionalización del Estado y las relaciones mercantiles.
- Privatizar con prudencia y eficacia en el marco de políticas estructurales de inserción externa o promoción económica.
- Acentuar los mecanismos redistributivos, especialmente los de orden fiscal, en beneficio de políticas sociales de lucha frontal contra la pobreza y mejora de la productividad del factor trabajo.

Bibliografía

- Altimir, O. (1990) «Desarrollo, Crisis y Equidad», en *Los Años Noventa: ¿Desarrollo con Equidad?*. CEPAL-FLACSO, Santiago de Chile.
- Calderón, F. (1992) *Latinoamérica: el gato que ladra*. Ed. Siglo XXI.
- CEPAL (1991), *Notas Sobre el Desarrollo Social en América Latina*. Santiago de Chile.
- CEPAL (1990), *Magnitud de la Pobreza en América Latina en los años ochenta*. Santiago de Chile.
- CEPAL (1991), *La Equidad en el Panorama Social de América Latina durante los años ochenta*. Santiago de Chile.
- Curbelo, J.L. (1992), «Desarrollo y políticas en América Latina en el cambio de siglo», *Comercio Exterior*, vol.42, 9:811-821.
- Faletto, E. (1990) «Equidad, Transformación Social y Democracia en América Latina», en *Los Años Noventa: ¿Desarrollo con Equidad?*. CEPAL-FLACSO, Santiago de Chile.
- Gurrieri, A. (1990) «El Desarrollo Social en los años noventa: Principales Opciones», en *Los Años Noventa: ¿Desarrollo con Equidad?*. CEPAL-FLACSO, Santiago de Chile.
- Katzman, R.; Gerstenfeld, P. (1990) «Áreas Duras y Áreas Blandas en el Desarrollo Social», *Revista de la CEPAL* 41: 159-182.
- Morales, E. (1987) *Descentralización del Estado, Movimiento Social y Gestión Local*. Santiago de Chile, ICI-FLACSO-CLACSO.

Cuadro I. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO*
(Tasas anuales medias)

	1980	1983	1985	1987	1989	1990
ARGENTINA	2.6	4.7	6.1	5.9	8.0	7.4
BARBADOS	12.6	15.0	18.7	16.4	16.4	15.0
BOLIVIA	7.1	8.5	5.8	7.2	10.2	9.5
BRASIL	6.2	6.7	5.3	3.7	3.6	4.3
COLOMBIA	9.7	11.7	14.0	11.7	9.8	10.3
COSTA RICA	6.0	8.5	6.7	5.9	5.5	5.4
CHILE	11.7	19.0	17.0	11.9	7.5	6.5
ECUADOR	5.7	6.7	10.4	12.0	14.3	-
GUATEMALA	2.2	9.9	12.0	12.1	7.2	6.4
HONDURAS	8.8	9.5	11.7	11.4	9.4	7.1
JAMAICA	13.8	13.1	10.9	8.6	16.8	15.7
MÉXICO	4.5	6.6	4.4	3.9	2.9	2.9
PANAMÁ	10.4	11.7	15.6	14.0	22.0	16.5
PARAGUAY	3.9	8.3	5.1	5.5	6.1	6.6
PERÚ	7.1	9.0	10.1	4.8	7.9	8.3
URUGUAY	7.4	15.5	13.1	9.3	8.7	9.3
VENEZUELA	6.6	11.2	14.3	9.9	9.7	10.7
Promedio simple	7.4	10.3	10.7	9.1	9.8	8.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

* Para información sobre cobertura y otros aspectos técnicos véase CEPAL, Anuario de América Latina y el Caribe 1990.

**Cuadro II. EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL POR HABITANTE
EN OCHO PAÍSES DE AMÉRICA LATINA**
(Índices 1982=100)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
ARGENTINA	131.8	117.5	134.0	135.1	100.0	106.7	110.8	122.1	117.1	—
BRASIL	71.3	94.2	89.5	92.2	100.0	91.1	83.7	85.5	98.8	103.3
CHILE	75.1	77.4	83.4	96.2	100.0	90.0	94.6	89.4	86.5	82.6
ECUADOR	95.6	72.1	115.1	111.1	100.0	88.7	85.4	87.8	103.2	99.3
PARAGUAY	59.4	65.1	64.1	77.4	100.0	94.7	88.8	72.6	61.6	61.1
PERÚ	—	—	107.3	117.0	100.0	89.8	91.7	87.8	108.4	79.4
URUGUAY	70.3	62.2	77.3	91.3	100.0	74.9	64.2	62.8	70.6	79.0
VENEZUELA	95.6	90.4	92.0	103.2	100.0	107.5	70.3	68.2	80.5	—

FUENTE: CEPAL, División de Desarrollo Social. Elaborado con datos del Fondo Monetario Internacional, tomados del Government Finance Statistics Yearbook.

Los índices están expresados en monedas nacionales a precios constantes.

Para ello se utilizó el deflactor del Producto Interno Bruto de cada país.

Cuadro III. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES DE EDUCACIÓN Y SALUD, POR PAÍSES. 1950-1990.

	Tasas de escolarización de 6 a 11 años de edad			Tasa bruta de escolarización de segundo nivel			Analfabetismo (% sobre la población de 15 años y más)		
	1960	1980	1990	1960	1980	1987	1950	1960	1990
América Latina (19 países)	61.6	81.6	86.1	16.0	44.8	52.4	46.7	23.2	15.5
ARGENTINA	91.1	95.3	97.2	31.9	56.0	73.2	13.6 a	8.6	4.7
BOLIVIA	50.4	86.6	87.9	9.6	35.5	37.0	67.9	61.2	22.5
BRASIL	47.4	73.2	77.9	6.2	33.6	37.7	50.5	39.7	18.9
COLOMBIA	48.2	82.9	80.4	11.9	44.0	—	37.7	27.1	13.3
COSTA RICA	74.0	90.1	87.1	20.3	47.5	40.5b	20.6	15.6	7.2
CUBA	78.3	99.7	97.4	14.2	80.7	87.6	22.1	—	6.0
CHILE	73.9	89.6	90.5	22.9	53.0	70.0	19.8	16.4	6.6
ECUADOR	64.7	87.8	92.2	11.9	50.7	55.6	44.3	32.5	14.2
EL SALVADOR	48.4	65.0	70.8	10.8	24.4	—	60.6	51.0	27.0
GUATEMALA	31.0	49.4	56.9	6.1	18.0	21.0	70.7	62.2	44.9
HONDURAS	49.2	66.1	82.3	7.4	29.9	—	64.8c	55.0	26.9
MÉXICO	56.6	92.6	100.0	10.7	46.0	53.0	43.2d	34.5	12.7
NICARAGUA	37.9	63.2	72.0	7.3	42.6	43.0	61.6	50.4	—
PANAMÁ	64.6	89.2	91.6	26.9	61.0	59.9	30.1	23.2	11.9
PARAGUAY	66.0	78.6	80.1	11.1	26.2	29.5	34.2	25.5	9.9
PERÚ	59.6	87.1	98.9	18.6	58.8	73.5	—	38.9	14.9
REP. DOMINICANA	66.0	83.4	—	7.3	41.5	—	57.1	35.5	16.7
URUGUAY	94.6	83.6	94.6	36.6	60.0	—	—	9.5	3.8
VENEZUELA	68.7	85.9	91.0	17.7	40.6	—	50.5	37.3e	11.9
ESPAÑA ^f	—	—	—	—	—	—	17.6	7.1	4.6
PORTUGAL ^f	—	—	—	—	—	—	44.1	20.6	15.0

Cuadro: CONCLUSIÓN

	Esperanza de vida (años)			Mortalidad infantil (tasas por mil nacidos vivos)			Porcentaje de viviendas con acceso de agua potable		
	1950- 1955	1980- 1985	1990- 1995	1950- 1955	1975- 1980	1985- 1990	1960	1970	1980
América Latina (19 países)	51.4	65.0	67.8	127.7	76.9	59.8	34.5	52.2	66.3
ARGENTINA	62.7	69.7	71.4	63.6	40.5	32.2	48.4	—	86.0
BOLIVIA	40.0	56.2	53.1	175.7	138.2	109.9	22.5	39.3	60.0
BRASIL	51.0	63.4	64.9	134.7	78.8	63.2	25.1	32.8	54.9
COLOMBIA	50.6	67.2	68.2	123.2	59.4	39.7	50.0	67.8	70.5
COSTA RICA	57.3	73.5	74.7	93.8	36.6	19.4	58.9	78.2	86.9
CUBA	59.5	74.2	75.2	80.6	22.5	15.2	37.9	66.7	74.1
CHILE	53.8	71.0	71.5	126.2	46.6	18.1	55.1	81.6	81.4
ECUADOR	48.4	64.3	65.4	139.5	82.4	63.4	20.7	42.9	51.8
EL SALVADOR	45.3	57.2	62.2	151.1	87.3	57.4	20.8	47.2	—
GUATEMALA	42.1	59.0	62.0	140.6	82.4	58.7	22.0	42.3	52.3
HONDURAS	42.3	61.9	64.0	195.7	89.9	68.4	13.6	43.1	—
MÉXICO	50.8	67.4	68.9	113.9	59.0	42.6	55.5	61.0	70.7
NICARAGUA	42.3	59.8	63.3	167.4	93.0	61.6	15.2	38.7	—
PANAMÁ	55.3	71.0	72.1	93.0	31.6	22.7	50.2	52.2	75.4
PARAGUAY	62.6	66.4	66.9	73.4	52.8	48.9	10.5	11.1	20.5
PERÚ	43.9	58.6	61.4	158.6	104.9	88.2	28.1	29.6	37.9
REP. DOMINICANA	46.0	64.1	65.9	149.4	84.3	65.0	19.7	—	—
URUGUAY	66.3	70.9	72.0	57.4	42.4	24.4	59.5	80.6	86.5
VENEZUELA	55.2	69.0	69.7	106.4	43.3	35.9	41.6	72.4	85.3
ESPAÑA	63.9	75.8	77.4	62.0	16.0	10.0	—	—	—
PORTUGAL	59.3	72.2	74.5	91.0	30.0	15.0	—	—	—

Fuente: CEPAL, sobre la base de estadísticas oficiales. Para las tasas de escolarización de 6 a 11 años de edad, UNESCO, Trends and Projections of Enrollment by level of Education and Age: 1960-2025, noviembre de 1989.

a: Se refiere a la población de 14 y más años de edad

b: En 1980 las edades límites para estar en segundo nivel cambiaron de 12-16 años a 11-17 años.

c: Se refiere a la población de 6 y más años de edad.

d: Se refiere a la población de 10 y más años de edad.

e: Se refiere a la población de 15 a 59 años de edad.

f: La UNESCO no calcula estos indicadores para los países europeos.